

PONENCIA: Relaciones bilaterales signadas por la agenda energética. La Política exterior argentina con respecto a Bolivia y Chile
Rodolfo López(*)

En el invierno de 2004 el gobierno del presidente Néstor Kirchner fue afectado por una crisis energética que se ha agravado hasta la fecha generando restricciones en el abastecimiento del mercado interno y dificultad para cumplir con los compromisos de exportación heredados desde el gobierno de Carlos Menen. En particular la crisis ha resentido el Acuerdo de Suministro de Gas firmado con el vecino gobierno de Chile, que heredara la actual presidente Michele Bachelet.

Durante los primeros años del gobierno de Kirchner, la importación de gas boliviano, vía Gasoducto del Noroeste, estuvo signada por la inestabilidad política boliviana que se expresó en el derrocamiento del presidente Sánchez de Losada, la renuncia de su vicepresidente a cargo Carlos Mesa y las incertidumbres del período electoral.

Finalmente asume la presidencia de Bolivia Evo Morales, quien había hecho de la nacionalización de los hidrocarburos el eje de su campaña.

Este trabajo aborda entonces cuales han sido los efectos del decreto nacionalizador del 1 de Mayo de 2006 de Evo Morales en las relaciones bilaterales de Argentina con Bolivia como proveedor de gas y Chile como comprador y cómo el gobierno de Néstor Kirchner condujo ese proceso.

El alcance de la nacionalización del gas en Bolivia

La nacionalización de los hidrocarburos por el Decreto Supremo 28701 del 1 de Mayo de 2006, leído por Evo Morales en el campo San Alberto, acompañado por el Alto Mando Militar, es la medida de más impacto regional tomada por su gobierno.

El mandatario mencionó que estaba cumpliendo su promesa electoral, con la que ganó los comicios del 18 de diciembre de 2005, atendiendo a los resultados del referéndum celebra-

(*) Doctor en Ciencias Sociales. Docente de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Integrante del proyecto de investigación “POLÍTICAS EXTERIORES COMPARADAS DE AMÉRICA LATINA, REGIONALISMO Y SISTEMA MUNDIAL (1990-2005)”, SECAyT-UNC. rodlope@speedy.com.ar

do en julio de 2004 que dio un amplio apoyo a la nacionalización. El anuncio no podía sorprender. La disputa por el control de este recurso natural no renovable atraviesa prácticamente todas las luchas sociales que se dieron en Bolivia en los últimos años.

Bolivia posee las segundas reservas de gas de América del Sur después de Venezuela. El reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos fue el detonante de las protesta que forzaron la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada en 2003 y la de su sucesor Carlos Mesa en 2005.

Si bien el Estado recuperó la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo con la Ley 3058, aprobada en mayo de 2005, en medio de fuertes movilizaciones sociales, el decreto nacionalizador dio una vuelta de tuerca más en el control estatal sobre el conjunto de la cadena productiva

Con la nacionalización, en primer lugar, el decreto obliga a las empresas extranjeras a entregar de inmediato toda su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que monopoliza la comercialización (lo que permite fijar los precios internos y de exportación).

En segundo lugar, se establece que sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten las disposiciones del Decreto y renegocien sus contratos en un plazo no mayor de 180 días.

En tercer lugar (y aunque no es definitivo ya que se esperan los resultados de las auditorias para establecer los porcentajes definitivos) el decreto nacionalizador eleva regalías, impuestos y participaciones que se transfieren al Estado, estableciendo el 82% del valor de su producción, en los megacampos que produjeron en promedio más de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas en 2005 (cifra que sólo alcanzan los campos de Alberto y Sábalo operados por Petrobrás) y 50% para los campos cuya producción haya sido menor de esa cifra.

En cuarto lugar obliga a las administradoras de fondos de pensión a transferir a YPFB las acciones que son propiedad de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva de las empresas petroleras capitalizadas en 1994 durante el primer gobierno de Sánchez de Losada. Se trata de Chaco Andina y Transredes la primera de British Petroleum y Bidas, la segunda de Repsol y la tercera de Shell y Enron.

En quinto lugar otro artículo hace referencia a nacionalizar las acciones necesarias para que YPFB logre como mínimo el 50% más 1 (es decir la mayoría de las sillas del directorio) en esas empresas (Chaco, Andina y Transredes) y en la Petrobrás Bolivia Refinación y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA.

Esta mención específica muestra que la nacionalización con respecto a Petrobrás se "enfoca en las refinerías" que serían sacadas de su control.

"Queremos socios, no dueños", insistió Evo Morales al redefinir la relación de su gobierno con la inversión extranjera".

Aunque el decreto era esperado los afectados se vieron sorprendidos por la inclusión de medidas "tan radicales" y por el tono enérgico del presidente.

El "decreto supremo" estableció que todos los campos petrolíferos debían ser ocupados por el ejército y por funcionarios de YPF¹.

A pocos días de la nacionalización el Ministro de Hidrocarburos de Bolivia Andrés Soliz Rada (Página 12 14-05-06) explica que la política energética de su gobierno apunta no sólo a nacionalizar los recursos hidrocarburíferos y convertir a su país en "un torrente energético" sino a industrializar el sector, cambiar la matriz energética y aumentar los ingresos del Estado en beneficio del pueblo boliviano.

Esta estrategia de alcance amplio se pondría en evidencia en el contenido de los acuerdos de suministro renegociados con Argentina y Brasil.

Argentina: el convenio-marco se firmó el 29 de junio de 2006

Al igual que a los brasileños el plan boliviano tomó a los argentinos completamente desprevenidos. Habiendo renegociado un nuevo contrato de suministro con el presidente Carlos Mesa a la fecha de nacionalización el gobierno argentino se encontraba en plena negociación de precios y mayores cupos que pudieran dar viabilidad efectiva al proyectado anunciado por el presidente Kirchner, el denominado Gasoducto del Noreste, resorte indispensable para aliviar la crisis energética argentina.

Sin embargo se observan diferencias. Así como la nacionalización del gas en Bolivia ha generado tensiones entre el gobierno de Brasil y Bolivia, la solución acordada a los precios del gas y al aumento de los volúmenes de importación ha tornado excelentes las relaciones Bolivia-Argentina y disparado un proceso de cooperación e integración bilateral más vasto.

La Argentina buscaba garantizarse estabilidad a largo plazo y volumen creciente.

El convenio-marco suscripto el 29 de junio de 2006 en Hurlingham por Néstor Kirchner y Evo Morales que sube el precio del gas a 5 dólares por millón de BTU y garantiza la provisión por 20 años es muy sencillo, consta apenas de nueve artículos y llegó tras negociaciones aceleradas y en sus primeros tramos bastantes tensas.

La Argentina seguirá contando con un abastecimiento de 7,7 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Bolivia en una primera etapa (como hasta ahora), y de 20 millones adicionales una vez que entre en operación el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), el proyecto -de más de 1.500 km. y una inversión de más de 1200 millones de dólares-, que se habían comprometido a construir Techint y Repsol-YPF y que fue frenado y puesto en duda por la incertidumbre boliviana, que para los petroleros precede a Evo Morales, (al frenarse las inversiones en Bolivia no se garantizarían las reservas necesarias).

¹ Mediante la mencionada norma jurídica no pasan al dominio del estado los bienes de las empresas que operan en el país -plantas maquinarias y otros activos-. El texto no es confiscatorio. No queda claro que "todas" las empresas extranjeras o simplemente las mencionadas tengan que asociarse con YPF y tampoco queda claro si las empresas deben ser indemnizadas.

La Argentina acordó pagar un precio mayor al que se venía negociando. Se acordó que el precio de 5 dólares por millón de BTU, sólo corresponderá al período 15 de julio a 31 de diciembre de 2006. A partir de 2007 el precio surgirá de una fórmula polinómica de ajuste a convenir entre ambos gobiernos.

En esta nueva relación contractual no sólo cambiará el precio sino también los actores. En el marco del anterior contrato, quien vendía el gas desde Bolivia era una empresa privada y quien lo adquiría en la Argentina era otra empresa privada, usualmente filial de la misma casa matriz que la vendedora del otro lado de la frontera.

A sugerencia de Bolivia, ahora el contrato de exportación-importación se concreta entre YPF y ENARSA, las dos empresas energéticas estatales de ambos países.

El convenio también prevé la construcción de una planta de separación de licuables de gas (propano, butano) en el departamento boliviano de Tarija.

La planta separadora será financiada por el gobierno argentino "en condiciones concesionales preferenciales" y será "propiedad soberana" de YPF.

Hay dos condiciones adicionales impuestas por el gobierno de Evo: su producción atenderá prioritariamente las necesidades del mercado boliviano y su puesta en marcha tendrá, como fecha tope, el inicio de las exportaciones a través del GNEA. Dicho en otros términos, si no hay planta, no hay gas para el nuevo gasoducto.

Los dos países también se comprometen a analizar la viabilidad de instalar una planta de generación termoeléctrica en Bolivia alimentada a gas, cuya generación sería destinada tanto al consumo interno del país vecino como para su exportación a la Argentina. También se estudiará la posibilidad de desarrollar actividades conjuntas de exploración y explotación en Bolivia entre YPF y ENARSA. Sin equipos ni personal técnico, la única alternativa posible de llevar a cabo semejante emprendimiento sería encontrar en lo inmediato un socio operador. Se descontaba que PDVSA, estaría dispuesta a cumplir ese rol.

Al igual que en el acuerdo Mesa-Kirchner el gobierno de Evo Morales se reservó una cláusula para prevenir la posibilidad de que Argentina reexporte parte del gas que empezará a recibir cuando se construya el nuevo ducto. Como señala Raúl Dellatorre (Página 12. 30-06-06. p. 3) el artículo tercero del convenio señala que el gas comercializado será para "satisfacer la demanda interna y no podrá ser destinado a aumentar las autorizaciones de exportación de la Argentina a terceros países sin el acuerdo de ambas partes". Esta cláusula no afecta los compromisos de exportación asumidos.

Cabe aclarar al respecto que la asunción de Evo Morales en Bolivia abrió el diálogo con la presidenta Michele Bachelet, luego de las tensas relaciones entre el gobierno de Mesa y Lagos, pero el referéndum del 18 de julio de 2004 sigue limitando el accionar de Evo Morales en lo que respecta a la venta de gas a Chile. El actual gobierno boliviano heredó el mandato popular de: utilizar el gas como instrumento para presionar a Chile por su salida al mar.

A partir del referéndum de 2004, Bolivia utilizaría la provisión de gas a Chile con la lógica de la política de poder, como un instrumento de transacción para su salida al Pacífico.

Desde el punto de vista político un párrafo de la declaración conjunta debe ser leído con atención. Evo Morales insiste allí con el reclamo histórico de salida al mar y Kirchner le augura "el mayor de los éxitos" en ese objetivo.

El primer avance concreto en otros temas de cooperación es el compromiso para reconstruir con capital argentino el puente entre las localidades de Argentina Salvador Mazza y la boliviana de Yacuiba. También se incluyeron convenios para venta de tractores a Bolivia, con créditos a largo plazo facilitados por el Banco de la Nación y el BICE a 20 años, y acuerdos de cooperación en desarrollo agropecuario en donde la Argentina puede proveer insumos y tecnología.

A la firma del acuerdo, los funcionarios de Argentina y de Bolivia acordaron que "a más tardar en la primera quincena de diciembre se llamará a licitación para construir el Gasoducto del Noreste Argentino. Tiene una capacidad de diseño original de 20 millones de metros cúbicos por día, ampliables a 30 millones. La Argentina se asegura la provisión de gas natural hasta el 30,7 por ciento del consumo estimado para 2010. En la medida en que la Argentina no prohíba sus exportaciones de gas, para el 2014 las reservas de gas natural se habrán agotado; en tal lamentable situación, su oferta primaria está cubierta totalmente de importaciones de ENARSA.

Sus obras estarán finalizadas para 2010 y será operado conjuntamente por YPFB-ENARSA. Llevará gas natural a Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, provincias que carecen de ese energético esencial.

Según Fernando Bernal, analista energético, en el contexto del acuerdo de integración energética firmado entre la Argentina y Bolivia, el gobierno de Néstor Kirchner introduce con más fuerza al Estado como protagonista (en realidad ENARSA ya estaba creada) en un sector estratégico de la economía: como el hidrocarburo. Dados los importantes volúmenes de gas natural a importar, cuya compra y comercialización dependerán exclusivamente de ENARSA, la empresa nacional ingresará al selecto grupo de compañías que concentran la oferta primaria de gas natural pasando a gravitar con fortaleza y progresivamente en el mercado gasífero argentino.

A partir de la implementación del paquete de privatización de los años noventa, el sector gasífero –como el petrolero– vive gobernado por un oligopolio. En el 2005 el 89,6% del gas natural fue extraído únicamente por seis empresas: Repsol-YPF, Total Austral, Pan American Energy, Pluspetrol, Petrobras y Tecpetrol, las cuales sumadas a otras tantas compañías privadas abastecen el 100 % de la oferta primaria de hidrocarburos.

Uno de los efectos de la nacionalización del gas en Bolivia ha sido fortalecer propuestas en línea con esa estrategia como la impulsada por el grupo Moreno que aspira a la reestatización de los hidrocarburos en Argentina.

En este contexto, el presidente Kirchner ha presionado a la empresa Repsol-YPF para que aumente la inversión en el sector de prospección y exploración en sus campos concesionados

y, a su vez impulsado algunos proyectos de prospección conjunta entre ENARSA e Repsol-YPF, en nuevas áreas.

Entre los efectos no deseados de este acuerdo se destaca el hecho de que los mayores precios que el gobierno argentino acuerda pagar a Bolivia por el gas pone en evidencia la tremenda distorsión de los precios internos subsidiados y los bajos precios que reciben las empresas petroleras que operan en el país lo que desalienta ganancias y las bajas regalías que obtienen las provincias por el valor de la producción.

El otro gran efecto es que a consecuencia de las decisiones tomadas por el gobierno argentino y debido al inadecuado manejo de las negociaciones se ha abierto una brecha en la relación Argentina-Chile considerada estratégica por ambos gobiernos.

Por su parte, Bolivia y Argentina reforzaron los acuerdos firmados en Hurlingham e iniciaron una alianza en la esfera energética con los acuerdos suscritos en octubre de 2006, cuando en la oriental ciudad de Santa Cruz de la Sierra acordaron en firme incrementar hasta 27,7 millones de metros cúbicos las exportaciones diarias de gas natural boliviano. Argentina compra en la actualidad unos 7,7 millones de metros cúbicos diarios de gas. Este acuerdo permite la viabilización del megaproyecto Gasoducto del Noreste.

El último paso en sellar los acuerdos de Hurlingham se dio en la reciente reunión tripartita celebrada el 10 de Agosto, en la localidad boliviana de Tarija entre los presidentes Evo Morales, Hugo Chávez y Néstor Kirchner, en la que se asistió a la firma de un acuerdo bilateral sobre un crédito de 450 millones de dólares que entregará Argentina, destinado a la construcción de la planta separadora de líquidos de gas natural a construirse en Campo Pajoso y el lanzamiento internacional para la construcción de esa obra, consistente en la licitación para el estudio de ingeniería básica, previa a la construcción de la planta de extracción de licuables y su sistema de evacuación.

Según el cronograma, los estudios definitivos deben comenzar en enero de 2008 y dar como resultado la cifra de la inversión necesaria para la construcción de esa fábrica de separación y evacuación de los componentes más ricos del gas. Argentina brindará a YPF un crédito concesional a 20 años de plazo y con una tasa de interés anual 1,5 por ciento.

La planta será la más grande de Sudamérica, pues separará 30 millones de metros cúbicos diarios.

Durante la ceremonia oficial de Tarija, Kirchner ofreció a Morales inversiones de la empresa petrolera estatal argentina ENARSA, en caso de que la brasileña Petrobrás, la española Repsol o cualquier otra compañía no cumplan con sus promesas de gasto en los campos gasíferos de Bolivia, lo que pone en evidencia un gesto más de apoyo de Kirchner al proceso de nacionalización de Morales no exento de dificultades, tanto internas como externas, y paradójicamente significativamente tensas entre Bolivia y Brasil, cuya compañía estatal Petrobrás se ha comportado como las resistencias y presiones de una transnacional más.

Negociación Argentina-Chile

Resuelto en Hurlingham el acuerdo con Bolivia, se volvía urgente la negociación con Chile.

Es un secreto a voces que el gas que Argentina importa de Bolivia, completa los cupos de exportación a Chile.

Desde el acuerdo-marco del 29 de junio Argentina debe comprar más caro el gas a Bolivia y decide que ese incremento no tenga impacto en el mercado argentino, aumentando la retención a las exportaciones al gas de exportación, la mayoría del cual es adquirido por Chile.

Si bien la nacionalización del gas en Bolivia afecta a Chile por el lado del precio que debe pagar por el gas importado de Argentina que es su único proveedor, cabe analizar dos circunstancias que son previas: que un país que no tiene excedentes garantizados es el que provee de gas al país trasandino y que finalmente Chile deberá reconsiderar una solución a su diferendo con Bolivia por la salida al mar derivado de la Guerra del Pacífico, para que esa solución le permita abastecerse del gas boliviano en forma directa para poder crecer.

Argentina exporta a Chile en promedio entre 13 y 15 millones de metros cúbicos de gas por día, y el fluido es clave para decenas de empresas y millones de consumidores.

Sin embargo el Protocolo de 1995 firmado entre ambos países habilita a Argentina a priorizar el abastecimiento interno al momento del otorgamiento de los permisos de exportación.

Amparándose en esta cláusula, durante la grave crisis energética que sorprendió a Argentina en 2004, nuestro país recortó las exportaciones a su vecino, obligando a cientos de empresas chilenas a usar combustibles más caros, tensando las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Lagos y Kirchner.

Luego del decreto nacionalizador de Evo Morales en mayo de 2006 Argentina seguía enfrentando una escasez de gas natural y volvió a recurrir a los recortes del suministro, en especial en las épocas de más bajas temperaturas en que aumenta el consumo domiciliario².

La presidenta Michele Bachelet se enfrentaba entonces a dos problemas sensibles al frente interno, la seguridad en los suministros y el aumento de los precios.

Como en el caso brasileño, las nuevas incertidumbres derivadas de la nacionalización del gas en Bolivia ocasionaron declaraciones en dirección a la decisión chilena de diversificar la matriz energética y de disminuir la dependencia de la provisión argentina.

Aunque probablemente justificados, vale reconocer que la decisión del gobierno argentino de fijar un precio diferencial de los combustibles para automóviles con patente extranjera en las localidades de frontera para evitar el contrabando hormiga de quienes cruzan con el único propósito de cargar combustible más barato (ya que en nuestro país la suba del precio de los combustibles está fuertemente regulada por el gobierno) y la de trasladar los costos del au-

² Como es natural, el gobierno argentino no piensa modificar la atribución de privilegiar las necesidades del consumo interno frente a los compromisos externos, que le permitió morigerar la política insensata seguida por los gobiernos anteriores, que autorizaron la construcción de gasoductos para la exportación mientras disminuía el horizonte de reservas.

mento del gas boliviano a Chile no fue bien manejado por el gobierno argentino. Estas noticias en la prensa de ambos lados de la cordillera tuvieron efectos contrarios en sus lectores, tranquilizó a los consumidores argentinos pero preocupó e indignó a los chilenos.

La situación de Bachelet es en algún sentido similar a la de Lula ya que es presionada por la derecha chilena para que actúe más duramente con el gobierno argentino y esta delicada situación es la que no evaluó con suficiente anticipación el gobierno argentino.

El gobierno chileno cifró expectativas en la reunión bilateral con el presidente Kirchner en la ciudad de Córdoba aprovechando la cumbre del Mercosur.

Durante ese encuentro Néstor Kirchner, se comprometió a hacer su mejor esfuerzo para garantizar el suministro de gas "La Argentina no es culpable, está dando todo lo que tiene disponible. No estamos minimizando en absoluto las exportaciones, estamos exportando lo más posible.

Bachelet regresó a Santiago con dos promesas no escritas, la seguridad de suministros para consumo residencial y de comercio y un precio de referencia para la importación de gas hecha por el ministro Julio de Vido de unos US\$ 4 el millón de BTU.

Las autoridades chilenas trataron de relativizar lo negativo del panorama energético y destacaron la utilidad de sus gestiones. Luego del encuentro de Córdoba en conversación con Radio Agricultura, el vicescanciller Van Klaveren expresó que lo importante es que Chile seguía comprando gas a Argentina a un precio menor del que estaban pagando otros países del continente.

Luego de la reunión de Córdoba, en declaraciones a medios chilenos el Ministro de Planificación General Julio de Vido (El Mercurio, 24-07-06) aseguró que, con respecto a la región, Chile pagará un precio más que razonable por el gas natural que compra a Argentina que no debería sobrepasar los cuatro dólares por millón de Unidad Térmica Británica (BTU). Al mismo tiempo objetó los valores difundidos por las compañías distribuidoras chilenas al señalar que esas empresas le cobran al usuario un monto varias veces superior a los del fluido.

Al mismo tiempo, a su regreso de Argentina la presidenta de Chile Michele Bachelet, calmó a los consumidores con dos mensajes, el primero expresando que está garantizado el suministro para los hogares y comercio. En segundo lugar comunicó que el gobierno trabaja con las distribuidoras para que el alza de costo a las distribuidoras no implique un alza de costo a los hogares³.

³ Según los cálculos del lado argentino el precio del gas en frontera puede ser fácilmente absorbido por la cadena de comercialización sin tener impacto real en los consumidores chilenos. El gas se vende en Santiago a US\$ 21,7 el millón de BTU, por las elevadas utilidades de las empresas que lo transportan desde la Cordillera y lo distribuyen a los centros urbanos. Para ello usan como referencia el precio del gas en garrafa (US\$27,4), que es el más alto de toda la gama de productos.

En cambio, los usuarios argentinos pagan en Buenos Aires 0,89 centavos de dólar el millón de BTU.

Los dos presidentes han comenzado a interrogarse acerca de la composición accionaria de las empresas que a cada lado de la cordillera producen, transportan y distribuyen el gas. La identidad y/o vinculación de accionistas explicaría

Chile estaba pagando el gas a 2,60 dólares el millón de BTU, incluyendo retenciones del 20%. Las declaraciones de De Vido afirmaron siempre que el aumento de las retenciones a las exportaciones de gas a Chile debían implicar una recaudación exactamente equivalente al incremento que Argentina tendría que pagar por el combustible a Bolivia.

Hubo sumas y restas para tratar de definir de cuanto deberían ser las retenciones para cerrar ese equilibrio. Efectivamente en Córdoba De Vido dijo "menos de 4 dólares", pero lo cierto es que cuando pasó al Ministerio de Economía los valores que Chile debía pagar en frontera por el gas superaba esa cifra, arrimándose a los 5 dólares el millón de BTU. Se dieron varias explicaciones como que la cifra prometida no incluía costos de transporte que suma unos 0,65 centavos de dólar o IVA pero esas explicaciones no convencieron al gobierno de Chile.

Argentina notificó oficialmente el lunes 24 de julio de 2006 a La Moneda sobre la Resolución del Ministerio de Economía argentino que eleva efectivamente las retenciones al gas que se exporta y cambia el punto de referencia.

Las retenciones a las ventas externas de gas eran de 20% sobre el valor de cada contrato y pasarán al 45% del valor fijado con Bolivia.

El anuncio de la carta personal de Bachelet dirigida a Kirchner, por lo que entiende un incumplimiento a lo acordado en Córdoba y una decepción para el pueblo chileno fue realizado en el aeropuerto de Santiago, antes de abordar el avión que la llevaría a la asunción del mando de Alan García. En ella se dijo, según Mónica González (Clarín, 28-07-06. p. 12) que "Chile tiene la mejor disposición a continuar trabajando por temas comunes, pero que va a ser necesario hacer mucho trabajo –y de otra manera– para poder recomponer las relaciones de confianza y de asociación estratégica para que esto sea una realidad en ambos países".

La relación estratégica que había existido por sucesivos gobiernos de Argentina y Chile y que había sido ratificada por Lagos y Kirchner en los tiempos preelectorales del escenario argentino, asimismo como por el mismo gobierno de Bachelet y el presidente Néstor Kirchner y su esposa Cristina, aparecía ahora como congelada, o sea debe entenderse que las relaciones entre Argentina y Chile estarían pasando por su peor momento de los últimos años.

La carta de Bachelet fue respondida por el presidente Kirchner por otra de la cual no trascendió el contenido. Luego de ella el tema se ha acallado.

El estado de la relación bilateral que ha profundizado lazos en los últimos años debe preocupar. Nuestra interpretación apunta a que los problemas de Bachelet pasan antes por el hostigamiento de la derecha de su país y por la relación con las empresas distribuidoras y transportadoras que por conflictos con Argentina.

Desde que comenzaron las exportaciones en 1996, la Argentina le permitió a Chile ahorrar 15.000 millones de dólares: esa es la diferencia que hubiera debido pagar de haber consumido fuel oil, diesel oil y/o carbón en lugar de gas.

buena parte de las maniobras que permiten pagar poco en la Argentina y cobrar mucho en Chile, internalizando beneficios extraordinarios.

Lo cierto es que Argentina no lucra con la venta del gas a Chile. .

En el transcurso de las conversaciones el gobierno argentino también realizó un llamado al Gobierno Chileno para indagar el precio al que entregan el gas las empresas distribuidoras. El Subsecretario de relaciones Exteriores Alberto van Klaveren respondió: "No puedo opinar sobre diferencias de precios que pudieran existir en el caso del gas en Chile, el tema de la regulación o supervisión de tarifas no es un tema de Cancillería, es un tema de otros ministerios", dijo.

Luego de la reunión de Córdoba la derecha objetó (hay un viaje a La Paz). En el Mercurio del 24 de julio sale: El subsecretario de Relaciones Exteriores indicó que la controversia generada por el tema marítimo, el que fue incluido en la agenda con Bolivia, no tiene justificación, ya que nunca se habló de soberanía. "Consideramos que polémica no se justificó, creemos que no hay comprensión adecuada de lo que efectivamente aceptamos, aceptamos hablar del tema marítimo en términos generales, no hablamos de cesión soberanía, no hubiéramos estado dispuestos a hacer eso, no teníamos mandato para hacerlo y no teníamos ninguna voluntad de hacerlo", sostuvo. Paradójicamente el alejamiento del gobierno chileno de la Argentina terminó produciendo un ambiente más favorable al acercamiento de posiciones entre el gobierno de Bachelet y el de Evo Morales.

La relación entre los gobiernos de Bachelet y Kirchner nunca volvió a los niveles de cordialidad y sintonía que habían tenido antes de la crisis de suministro y de las desprolijidades y desacuerdos a la hora de definir nuevos precios.

Paradójicamente el alejamiento del gobierno chileno de la Argentina terminó produciendo un ambiente más favorable al acercamiento de posiciones entre el gobierno de Bachelet y el de Evo Morales.

Conclusiones

La decisión de Bolivia de nacionalizar sus hidrocarburos se condice con una tendencia mundial, el negocio petrolero está en manos de los Estados en los principales países productores del mundo y también se manifiesta como un fenómeno regional.

Esa iniciativa es capaz de disparar impulsos de renacionalización, al menos en algunos sectores políticos como lo ha hecho en la Argentina y en Chile. La nacionalización del gas en Bolivia presiona en dirección al cambio de roles protagónicos entre los Estados y las empresas. La nacionalización del gas en Bolivia torna posible cambios en otros países hacia modelos de extracción de recursos hidrocarburíferos en beneficio de los pueblos y no de las empresas transnacionales.

La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia habilita al Estado boliviano a renegociar sus contratos "Estado-empresa" y dispara, a su vez, los tiempos políticos de la renegociación de los contratos "Estado-Estado", es decir los acuerdos bilaterales que regulan la provisión del

gas hacia los pueblos vecinos que constituyen su mercado natural, esta situación ha crispado las relaciones internacionales de los países sudamericanos.

En esta nueva relación contractual no sólo cambiará el precio sino también los actores. En el marco del anterior contrato, quien vendía el gas desde Bolivia era una empresa privada y quien lo adquiría en la Argentina era otra empresa privada, usualmente filial de la misma casa matriz que la vendedora del otro lado de la frontera.

A sugerencia de Bolivia, ahora el contrato de exportación-importación se concreta entre YPF y ENARSA, las dos empresas energéticas estatales de ambos países.

Sin embargo se observan diferencias. Así como la nacionalización del gas en Bolivia ha generado tensiones entre el gobierno de Brasil y Bolivia, la solución acordada a los precios del gas y al aumento de los volúmenes de importación ha tornado excelentes las relaciones Bolivia-Argentina y disparado un proceso de cooperación e integración bilateral más vasto. En este contexto, cabe destacar que la administración Kirchner a través de cerrar el acuerdo gasífero con Morales, antes que éste concluyera las negociaciones con Brasil, significó para el nuevo gobierno boliviano un fuerte apoyo político a su gestión, tanto en el ámbito interno como sub-regional.

Pero paradójicamente, las perspectivas de una relación estratégico entre los gobiernos de Argentina y Chile, comenzaron a deteriorarse a partir del 2004, cuando la grave crisis energética que sorprendió a Argentina, nuestro país recortó las exportaciones a su vecino, obligando a ciertas empresas chilenas a usar combustibles más caros, con lo cual se tensaron las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Lagos y Kirchner.

La nueva presidenta chilena Michele Bachelet heredó la crítica situación energética de su país, al depender exclusivamente de las importaciones del gas argentino. Esto derivó en dos problemas sensibles al frente interno, la seguridad en los suministros y el aumento de los precios del recurso energético.

Aunque probablemente justificados, vale reconocer que la decisión del gobierno argentino de fijar un precio diferencial de los combustibles para automóviles con patente extranjera en las localidades de frontera para evitar el contrabando hormiga de quienes cruzan con el único propósito de cargar combustible más barato, y la de trasladar los costos del aumento del gas boliviano a Chile no fue bien manejado por el gobierno argentino. Estas noticias en la prensa de ambos lados de la cordillera tuvieron efectos contrarios en sus lectores, tranquilizó a los consumidores argentinos pero preocupó e indignó a los chilenos.

Esto generó una tensa situación para el gobierno de Bachelet ya que fue fuertemente presionada por la oposición para que actúe más duramente con el gobierno argentino y esta delicada situación es la que no evaluó con suficiente anticipación el gobierno argentino.

En la Cumbre del MERCOSUR, realizada en Córdoba, Kirchner y Bachelet, abordaron el tema energético, en donde la Argentina se comprometió a brindar la seguridad de suministros para el consumo residencial y el comercio y un nuevo precio de referencia para la exportación

del gas al país trasandino. Las autoridades chilenas trataron de relativizar lo negativo del panorama energético y destacaron la utilidad de sus gestiones.

Indudablemente las relaciones entre Argentina y Chile no retornaron, más allá de la retórica, a tener una visión estratégica en ambos países, producto de los desaciertos, y desencuentros entre ambos gobiernos. Esto llevó a que el gobierno chileno reencauzara sus relaciones con Perú, asistiendo la presidenta Bachelet a la asunción del nuevo presidente peruano Alan García, a pesar de las disputas por la soberanía de un cono de soberanía marítima entre ambos estados; y la continuación de un mayor diálogo, comenzado por Lagos, entre la presidente chilena y su par boliviano Evo Morales.

El tema energético, seguirá signando, en gran medida, las relaciones exteriores de los países del Cono Sur americano. Para la Argentina, país con reservas gasíferas decrecientes, por la falta de prospección, exploración y extracción del recurso, producto de la privatización del sector en la década de los noventa, asumió compromisos de exportación con Chile que ante un leve aumento de la demanda no pudo cumplir con los acuerdos firmados, originado de tensiones políticas entre ambos Estados, y crisis políticas en el ámbito interno de los gobiernos de Lagos y Bachelet.

Para el caso boliviano, la política exterior argentina, tuvo una dimensión diametralmente opuesta, hasta con una visión geoestratégica significativa. Kirchner tuvo para el gobierno de Evo Morales un efecto estabilizador, tanto para el plano interno, al comprometerse a adquirir el gas a un precio superior al acordado anteriormente entre los países de la región, se comprometió a financiar obras de infraestructura, como la planta para industrializar el gas; y en ámbito internacional respaldar, aunque en forma indirecta, la negociación entre Bolivia y Brasil por el precio del gas.

Bibliografía

Dellatorre, Raúl: *Cambios en los roles protagónicos*, **Página 12**, 30 de junio de 2006, p. 3.

de Vido, Julio *dirige dardos a distribuidoras chilenas por el mayor precio del gas*, **El Mercurio**, 24 de julio de 2006.

González, Mónica: *Una carta de Bachelet a Kirchner en protesta por el precio del gas*", **Clarín**, 28 de julio de 2006, p. 12.